Se subasta un país

José Guerra

Tal Cual 29 de septiembre de 2009

www.pensarenvenezuela.org.ve

El gobierno que se proclama revolucionario y antiimperialista está realizando una subasta de Venezuela a los consorcios petroleros internacionales, tanto privados como estatales. Se trata de un plan cuyo objetivo es obtener recursos en divisas para financiar la venidera campaña electoral legislativa, mediante la adjudicación de lotes de la Faja Petrolífera del Orinoco a empresa internacionales que conforman una especie de nuevo cartel petrolero en sustitución de las antiguas siete hermanas, quienes hasta hace no poco tiempo decidían la suerte de la producción y el comercio de los hidrocarburos. A diferencia del viejo cartel petrolero, en esta ocasión las compañías petroleras internaciones en algunos casos obedecen a las estrategias de los Estados o gobiernos y en otras son parte del sector privado o de capitales mixtos. Cuando Juan Vicente Gómez comenzó a entregar concesiones petroleras una manada de aventureros, traficantes y mercaderes de tierras las compañías vieron la oportunidad de de oro para hacerse en aquel país depauperado, sin instituciones fiscales, de una parte del territorio nacional a bajo costo, donde presumiblemente se encontraría abundantes yacimientos de crudo.

Aquellos sujetos cercanos al epicentro del poder que representaba Gómez lograron el otorgamiento de vastas extensiones de terrenos que posteriormente fueron negociadas con las empresas que comenzaron a llegar a granel a Venezuela, en particular quienes primero tocaron suelo, a la vanguardia de las cuales se encontraban la Royal Dutch Shell, representada por Henry Deterning y la Standard Oil, de la familia Rockfeller, que en Venezuela se llamaba Creole Corporation. La consigna política de entonces de “no más concesiones” constituyó un enfoque correcto para prevenir que las áreas de mayor potencial de producción cayeran en manos de los consorcios internacionales, marcados éstos por una voracidad insaciable y el irrespeto a la soberanía de los países. Fue víctima Venezuela como nación y los

trabajadores petroleros de las agresividad de unas empresas que tenían tanto o más capacidad de decisión que un Estado en proceso de formación. Fue con la reforma petrolera de 1943 que el país comenzó a aumentar de manera sostenía su participación en el negocio petrolero y luego se dio un paso fundamental con la política del "fifty-fifty" (mitad y mitad) que permitió que el Estado venezolano, propietario del recurso natural, obtuviera lo que en justicia le correspondía.

A lo largo del período de la explotación nunca se contempló la conformación de capitales nacionales en la actividad de mayor dinamismo en Venezuela. Eran los campos petroleros terreno vedado a buena parte de los venezolanos a quienes les llegaba petróleo por los recovecos y sinuosos caminos del reparto de la renta petrolera por parte de su propietario, el Estado. Fueron así los venezolanos sujetos pasivos, receptores de segunda mano de la riqueza petrolera. Con ello se alejó la posibilidad de vertebrar en Venezuela grupos económicos sólidos, que no medraran al cobijo y la sombra del gobierno de turno, con las excepciones del caso.

Con el gobierno del Presidente Chávez ha funcionado una lógica curiosa. Un gobierno alebrestadamente nacionalista se ha entregado arrullado en los brazos de los nuevos potentados del petróleo, sean éstos estatales o privados, eso sí siempre y cuando prime la alianza estratégica y política que intenta crear una comandita que excluye de toda participación a los pocos capitales nacionales que sobreviven. Los amigos de Gómez fueron sustituidos por los socios de Chávez. Se privilegia así a las entidades extranjeras en desmedro del capital nacional el cual ha sido ajeno a los procesos económicos vinculados al petróleo, más allá de ser contratitas secundarios de la industria. Así, se apresta PDVSA a prorratear el 29 de septiembre de 2009, siete lotes de la Faja a corporaciones foráneas tales como Petrobras, La Compañía China de Petróleo, Chevron-Texaco, Gazpron, entre otras. Capitales todos ellos venidos del exterior con lo cual se excluye a quienes en Venezuela están dispuestos a invertir en el negocio petrolero. En esto reside el nacionalismo del gobierno, en otorgar ventajas al capital extranjero en detrimento de los nacionales.